

Mirza, Christian Adel. Capítulo I. Evolución de la región en su conjunto. El subcontinente y sus desafíos democráticos y sociales. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web:  
<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellcap1.pdf>  
Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina de la red CLACSO

<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

## PARTE III

### UNA MIRADA EN EL HORIZONTE PRÓXIMO

#### TENTATIVAS PROSPECTIVAS, ESCENARIOS PROBABLES



CAPÍTULO I

**EVOLUCIÓN DE LA REGIÓN  
EN SU CONJUNTO  
EL SUBCONTINENTE Y SUS DESAFÍOS  
DEMOCRÁTICOS Y SOCIALES**

TRAS LOS ENSAYOS neoliberales de los años ochenta y noventa, los efectos en casi todos los países considerados han sido devastadores, tanto de las respectivas economías como en términos de acrecentamiento de la pobreza, la exclusión y fragmentación social, el aumento de la brecha de la desigualdad y la inestabilidad de los sistemas políticos. Iniciado el siglo XXI, el mapa político en las naciones que consideramos se ha modificado profundamente, marcando una tendencia hacia la prevalencia de los sectores progresistas (ubicadas en el espectro ideológico hacia posiciones más o menos hacia la izquierda) que obtuvieron el gobierno por la vía electoral: en Argentina el “sorpresivo” giro de Néstor Kirchner hacia posiciones de izquierda; el triunfo del histórico líder Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil; el afianzamiento del poder de Hugo Chávez en Venezuela; el mantenimiento de la mayoría por la Concertación liderada por el presidente socialista Ricardo Lagos en Chile; el triunfo de Lucio Gutiérrez en Ecuador, con el respaldo inicial de las fuerzas progresistas; en Uruguay, aun cuando gobierna el presidente colorado Jorge Batlle, todo indica un avance sustantivo de la coalición de izquierda liderada por Tabaré Vázquez; en Paraguay, el presidente Nicanor Duarte Frutos expresa la visión de una corriente renovadora del Partido Colorado. Por otra parte, el gobierno de Uribe en Colombia sufrió un duro revés luego del fracaso del referéndum en octubre de 2003, en el que no se alcanzó el porcentaje necesario para la reforma de

la Constitución promovida desde el gobierno, así como con el triunfo de fuerzas progresistas de oposición en Bogotá y en otras regiones de Colombia. En Perú, el gobierno de Toledo se ha visto sacudido por movilizaciones sociales que le exigen el cumplimiento de los compromisos contraídos en la campaña electoral, y le cuestionan su acercamiento al gobierno norteamericano. En Bolivia, la caída del presidente Sánchez de Lozada tras el levantamiento y la revuelta encabezada por el movimiento campesino, fue sin duda el episodio más cruento y trascendente de fines del año 2003.

En líneas generales puede afirmarse que las corrientes que se opusieron al modelo neoliberal se han hecho fuertes en casi todas las naciones del subcontinente sudamericano, expresando la voluntad de cambio de sus correspondientes ciudadanías. Asimismo, los sistemas políticos, y más particularmente los sistemas de partidos, han registrado transformaciones importantes, no obstante haber sido sometidos con suerte dispar a fuertes cuestionamientos. Si en Argentina la consigna lanzada por los movimientos sociales casi espontáneamente de “que se vayan todos” los políticos y gobernantes auguraba cambios radicales de los elencos partidarios, los resultados posteriores indicaron una reconversión rápida del sistema y un reordenamiento del mapa de fuerzas en disputa. Varios de los “viejos” dirigentes políticos y legisladores mantuvieron sus cargos y posiciones, pese a la derrota contundente del menemismo. El triunfante en las elecciones del año 2003 fue el histórico Partido Justicialista, aunque también se registró una muy buena votación de las nuevas fuerzas políticas como el ARI, liderado por la diputada nacional Elisa Carrió, y la buena *performance* del también diputado de izquierda Luis Zamora, sobre todo en la capital del país. En Ecuador, la esperanza depositada en Lucio Gutiérrez se vio en parte frustrada tras el abandono de sus aliados del MUPP y la CONAIE, seis meses después de haber asumido responsabilidades directas en varios ministerios y otros cargos públicos. En ese período se discute en la interna de los movimientos sociales la estrategia de apoyo crítico al gobierno o de franca oposición, en el marco de algunas reformas que no convencen a quienes cuatro años antes habían contribuido decididamente a la caída de Jamil Mahuad. El sistema de partidos, más fragmentado aún, generó una pérdida del peso político de la socialdemocracia y el socialcristianismo, antes fuerzas de enorme peso en la cultura cívica ecuatoriana.

El panorama venezolano a más seis años de haber colapsado el sistema de partidos refleja una profunda dualización de la sociedad, cuya línea demarcatoria divide a los prochavistas de los antichavistas. Si bien los partidos históricos han sufrido una caída estrepitosa, la oposición al actual gobierno de Chávez se ha ido fortaleciendo conforme el nuevo modelo va impregnando todas las estructuras de poder social,

político y económico. La recolección de firmas del oficialismo y de la oposición, a fines de 2003, desembocó en la realización del Referéndum Revocatorio en agosto de 2004 con un contundente resultado a favor del presidente Chávez. En Uruguay, las opciones representadas por el Encuentro Progresista-Frente Amplio, coalición de centroizquierda e izquierda a cuyo frente está el candidato recientemente proclamado Tabaré Vázquez, arrojan un manto de incertidumbre para las pretensiones del continuismo del Partido Colorado o de su aliado estratégico, el Partido Nacional (ambos unidos en una coalición de gobierno hasta el año 2002), en las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2004. Lo concerniente a la dimensión económica está pautado en el subcontinente por las tensiones provocadas, entre otros factores, por el intento de Estados Unidos de imponer el ALCA como el proyecto de integración de las Américas, bajo su tutela y conducción incontrastable. A ello se antepone un proyecto alternativo levantado por Brasil y acompañado por Argentina, Venezuela, Paraguay y más tímidamente por Chile. Las economías nacionales en la mayoría de las naciones sudamericanas probablemente retomen cierto impulso al crecimiento, aunque su sostenibilidad dependerá en cierto modo de los acuerdos alcanzados en el marco de los procesos de integración regional, que evidencian señales de retonificación (el MERCOSUR vuelve a ser relevante y prioritario, hay acercamientos entre bloques, Pacto Andino con MERCOSUR, más naciones asociadas a este último, etcétera).

En este panorama regional, los movimientos sociales han recobrado su magnitud al erigirse como vertebradores de la oposición a los proyectos neoliberales, sobre todo ante la debilidad de los sistemas políticos (más precisamente de los partidos políticos históricos), que han fracasado o menguado su capacidad de respuesta ante la crisis social y económica generada, cuyos efectos habrán de perdurar aún por largo tiempo. La degradación aguda de los activos sociales repercute obviamente en los pronósticos de recuperación a mediano plazo, incluso con una perspectiva de crecimiento económico para la región, en virtud de haber impactado en las generaciones más jóvenes y vulnerables.

Hemos afirmado que en la mayoría de los países estudiados las corrientes políticas más proclives a las transformaciones estructurales han ganado terreno de manera sostenida; aun así, los condicionamientos del punto de partida para operar los cambios persisten y establecen los límites para la instrumentación de aquellos cambios. Factores que dependen de las tendencias mundiales y regionales, tanto en función de las economías más poderosas, como de los centros financieros de mayor poder, así como de aspectos geopolíticos y culturales, harán sumamente intrincados los recorridos de los estados nacionales que en América Latina han dado un golpe de timón hacia políticas marcadamente distanciadas de las implementadas en la última década del siglo

pasado. Basta una mirada al caso brasileño o al argentino, países en los cuales la dura negociación con los organismos financieros internacionales incide directamente en los programas de recuperación social y económica, a veces “coaccionando” y agregando más restricciones a las posibilidades de promover desarrollos endógenos y genuinos. El peso de las deudas externas es todavía un lastre muy pesado, y las opciones de refinanciación no aligeran sensiblemente los compromisos de amortización, tanto por los servicios anteriores como por los nuevos préstamos que tienden a cubrir las deudas pasadas, en una suerte de espiral interminable que no desata los nudos de la dependencia.

Es evidente que las demandas acumuladas tras los largos períodos de postración de la mayoría de las poblaciones seguirán presionando a los gobiernos electos; demandas y expectativas acrecentadas tanto por la propia necesidad material como por la percepción de una sensibilidad cualitativamente diferente de los responsables en la definición de las políticas públicas respectivas. Por tanto, no habrán de disiparse los núcleos del conflicto: la redistribución de la renta, la disputa por el poder, el control de los recursos naturales, la provisión de satisfactores básicos, la participación en las decisiones políticas y en la producción de hegemonías culturales, las luchas por la inclusión social de los “supernumerarios” y de los expulsados del mercado laboral, el reconocimiento de los derechos de las minorías (a veces no tan minoritarias), el antagonismo entre trabajo y capital en sus nuevas modalidades. Y habrá que responder; es decir, los nuevos elencos gubernamentales deberán dar cuenta de los reclamos y reivindicaciones sectoriales, actuando con celeridad y eficacia.

La acción social colectiva probablemente discurra por senderos multivariados, interrelacionados y no exclusivamente acotados a una problemática singular; con certeza también condicionada en los años próximos inmediatos por el sistema político que presenta cambios en la correlación de fuerzas y partidos con predominancia de las corrientes moderadamente transformadoras o renovadoras (Ecuador, Paraguay), o por sectores volcados a la izquierda del arco ideológico (Brasil, Argentina, Venezuela), con tendencias al relevo de las alianzas de derecha por una coalición de izquierda para el caso de Uruguay. Finalmente, con la incógnita en Chile por el desenlace de la confrontación electoral que ha posicionado mejor a la derecha vernácula.

Todo ello, inevitablemente, está postulando la necesidad de variar las estrategias de la lucha y la protesta social de los movimientos sociales. Los vínculos más o menos fuertes entre los partidos políticos de signo progresista con los movimientos sociales estudiados –esto es, la izquierda política y la izquierda social– que asentaron alianzas, sean virtuales o efectivas, eficaces en la articulación en clave de oposición, deberán asumir ahora (ya lo están poniendo a prueba) nuevos retos que

recompongan las relaciones con partidos políticos en el gobierno, el Estado y la sociedad civil. Las poblaciones mayoritariamente excluidas o afectadas por la acumulación de frustraciones respecto de mejoras que tardan o han sido sucesivamente postergadas, han depositado sus expectativas en los sectores que a su entender representan el cambio o al menos expresan mayor sensibilidad frente a las situaciones de marginación, desempleo, pobreza, exclusión o discriminación social. En estas circunstancias, podría pronosticarse una disminución de la polarización social y una reducción importante de la conflictividad de tipo confrontacional, no así de la movilización o la protesta social, conforme los estados nacionales arropados en gobiernos de signo progresista emitan señales contundentes en el sentido de atender las necesidades, demandas y reivindicaciones de las clases sociales más económicamente deprimidas.

Hemos registrado evidencias de esta afirmación prospectiva para el caso de Argentina, tomando en cuenta las declaraciones de voceros y dirigentes sociales del Movimiento Piquetero (particularmente de algunos más propensos al diálogo y la negociación en la actual coyuntura sociopolítica argentina), confirmados por una movilización de baja intensidad, “tolerada” o aceptada por el gobierno. Resulta interesante observar que, de un lado, el asambleísmo barrial aparentemente se ha debilitado, manteniéndose activo sólo en algunas zonas en la capital argentina y en otras ciudades de gran porte, mientras que, por otro lado, se expresa una movilización singular en torno al problema de la “seguridad ciudadana”, de reciente manifestación pública (2004), y relativamente inorgánica. Situándonos en Brasil, el MST ha otorgado una carta de crédito al gobierno de Lula, pese a la ocurrencia de nuevas ocupaciones que se explican por la necesidad de acelerar el proceso de reforma agraria, históricamente defendido por el PT, e incluido en su plataforma electoral. Algo similar acontece en Venezuela, no obstante el clima de confrontación entre los sectores de la oposición y el gobierno de Hugo Chávez; en este caso en un escenario altamente polarizado y donde la CTV asumió un papel decididamente contrario al proceso de reformas impulsado por las fracciones prevalentes del MVR. Sin embargo, otros movimientos sociales de significación, tanto a nivel urbano como campesino, no han replicado con movilizaciones de gran envergadura. En Paraguay, las movilizaciones de los últimos dos años y la creciente consolidación de un esquema de articulación entre movimientos sociales habilita a prever un incremento de la protesta social mediada por la estrategia del actual gobierno, más sensible –al menos en el discurso– a las demandas sociales, y decidido, por otro lado, a combatir la corrupción institucionalizada. En Uruguay, de confirmarse la tendencia actual de corrimiento del electorado hacia la fuerza política mayoritaria y opositora, se habrá de registrar un hecho histórico en

los próximos meses, esto es, el triunfo en las elecciones nacionales que colocará a la izquierda por vez primera en el gobierno nacional. Dados unos vínculos privilegiados entre las fuerzas de la izquierda política con la mayor parte de los movimientos sociales (proclives al cambio), puede presuponerse la instalación de un bloque o alianza estratégica que disminuya el grado de conflictividad, y modifique inclusive la naturaleza de la acción social colectiva. Exactamente lo contrario podría ocurrir en Chile si se verificara una derrota de la coalición que ha gobernado aquella nación desde hace casi dos décadas. Efectivamente, el relevo de la Concertación (democristianos y socialistas) por la derecha liderada por Joaquín Lavín implicaría tal vez no grandes cambios en términos de orientaciones de la política económica, pero sí en torno a la profundización del modelo neoliberal, y sobre todo un mayor distanciamiento de los movimientos sociales. La acción social colectiva podría alcanzar niveles de confrontación de envergadura, y el abandono definitivo de la política del consenso y la negociación (ruptura del pacto implícito), como modalidades priorizadas en los primeros años del post-autoritarismo.

Desde una vista panorámica en América Latina, la cercanía de los plazos para concretar los acuerdos impulsados por Estados Unidos vinculados al proyecto de integración de las Américas (ALCA) podría provocar un recrudecimiento de la movilización de los movimientos sociales, que en su gran mayoría se han opuesto firmemente a tales propósitos, percibidos como una suerte de “anexión”; la actitud de los gobiernos electos resultará vital para definir el cuadro de la confrontación. Hemos sostenido que uno de los clivajes del conflicto en América Latina guarda relación directa con el modelo neoliberal instrumentado en las últimas décadas en prácticamente todo el subcontinente, que ha despertado la crítica sistemática y la resistencia activa de los movimientos sociales. Indudablemente vinculado al proyecto de hegemonía norteamericana, y aun cuando las políticas de cuño neoliberal en casi todos los países considerados vienen siendo suplantadas por otras de signo heterodoxo, la aceleración del proyecto ALCA podría suscitar un clima confrontacional que lesionaría eventualmente las aproximaciones y el diálogo regenerado entre los movimientos sociales, los partidos políticos y el Estado. Desde la perspectiva institucional, la región estará aún caracterizada por la inestabilidad política, condicionada por la inclusión de la sociedad civil y los actores sociales en los procesos de reorientación estratégica (económica, social y cultural), sobre todo en aquellas naciones (Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela) en las cuales las ciudadanía abrigaron expectativas de renovación a partir de las recientes definiciones electorales. En Chile y Uruguay ello dependerá de los próximos relevos de los gobiernos aún en ejercicio, la consolidación del proceso de institucionalización fuertemente anclado en la partido-

cracia ya debilitada, y los enlaces entre el sistema de partidos con los movimientos sociales. Tanto sea por la reconfiguración de bloques o alianzas de poder, como por la fragmentación y disociación entre ambos actores, las democracias se verán fortalecidas o debilitadas. Podremos asistir en la región a la conformación de un perfil democrático incluyente, por un lado, o a la consolidación del perfil de una democracia excluyente y dual, por otro; ambos contextos sociopolíticos dependerán del papel central de los movimientos sociales, y sus posibilidades de encontrar las rutas consistentes para contribuir a la estabilidad, sobre la base de la equidad social, la participación y la reconstrucción de renovadas legitimidades para el sistema democrático.